



**Universidad Internacional de La Rioja**  
**Grado en Derecho**

---

# Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

---

Trabajo fin de grado presentado por: Paloma Robles Bujalance

Titulación: Grado en Derecho

Línea de investigación: Académica

Director: Doctor Manuel José Iglesias García

Ciudad: Madrid

Febrero, 2018.

Firmado por: Paloma Robles Bujalance

CATEGORÍA TESAURO: 3.1. Derecho. 3.1.1. Derecho Público. Derecho Penal.

## **INDICE**

### **I. ABREVIATURAS Y SIGLAS**

### **II. RESUMEN**

### **III. INTRODUCCIÓN**

### **IV. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS**

IV.I. Conceptualización de la PJ a los efectos recogidos en el art. 31 b CP

IV.II. Personas Jurídicas incluidas como sujetos de Responsabilidad Penal

IV.III. Personas Jurídicas excluidas como sujetos de Responsabilidad Penal

### **V. SUPUESTOS QUE GENERAN RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.**

V.I. Criterios de imputación de Responsabilidad Penal a la Persona Jurídica

V.II. Delitos

### **VI. CRITERIOS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA**

### **VII. CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA**

### **VIII. PRECEDENTES Y FUNCIONES DE LA REPARACIÓN. ART. 31 QUATER c) CP**

### **IX. LA REPARACIÓN EN LA EXPERIENCIA COMPARADA**

VIII.I. Alemania

VIII.II. Derecho Angloamericano

VIV.III. Francia

### **X. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL.**

X.I. Justicia Restaurativa

X.II. Mediación Penal

### **XI. VENTAJAS DE APLICAR LA INSTITUCIÓN DE LA MEDIACIÓN.**

### **XII. CONCLUSIONES**

### **XIII. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA**

### **XIV.FUENTES JURÍDICAS UTILIZADAS**

## **I. ABREVIATURAS Y SIGLAS**

CP: Código Penal.

LO: Ley Orgánica.

CC: Código Civil

PJ: Persona Jurídica

PF: Persona Física

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AEPSAD: Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

AEMET: Agencia Española de Meteorología

BOE: Boletín Oficial del Estado

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

ENAI-RE: Gestión de la Navegación Aérea

ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

SASEMAR: Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima

SEPES: Entidad Pública Empresarial del Suelo

SEPI: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

PPD: Plan de Prevención de Delitos

RP: Responsabilidad Penal

PRJR: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

ADR's: Alternativas a la resolución de conflictos

UTE: Unión Temporal de Empresas

JR: Justicia Restaurativa

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial

## II. RESUMEN

El presente trabajo tiene un enfoque jurídico-proyectivo. Pretendo esclarecer, valorar y proyectar el uso de la mediación en nuestro país dentro del sistema de RPPJ exponiendo la acogida de esta herramienta en países como: Alemania<sup>1</sup> y Derecho Angloamericano<sup>2</sup>.

Señalar que la principal novedad introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del CP, es que a partir de entonces se puede hablar de una responsabilidad propia de las PJ, (Feijoo Sánchez)<sup>3</sup>. Hasta entonces, podían sufrir determinadas consecuencias de la comisión de un hecho delictivo, pero no se les hacía responsables del delito<sup>4</sup>.

El régimen de RPPJ trata de fomentar que las corporaciones cumplan con la legalidad, así, la sanción está inspirada por la prevención reactiva<sup>5</sup> estableciendo circunstancias eximentes y atenuantes<sup>6</sup>.

**Palabras clave:** Persona jurídica, responsabilidad penal, compliance, reparación, justicia restaurativa, mediación penal.

---

<sup>1</sup> ROXIN, C. (1991) "La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones". Jornadas sobre la

<sup>2</sup> GOENA VIVES, B. (2017): "*Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica*". Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid, 2017. Pág. 314-315

<sup>3</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pag. 56

<sup>4</sup> Art. 31 bis de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos".

<sup>5</sup> GOENA VIVES, B: (2017) "*Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica*". Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid, Pág. 117 (...el objetivo de las sanciones a PJ no se queda en la mera prevención disuasoria. Principalmente, persigue una reacción por parte de la concreta empresa sancionada, y por extensión, de la generalidad de las empresas"

<sup>6</sup> Art. 31 bis de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

### III. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo persigo enlazar de forma adecuada, justificada y bien documentada dos mundos que a priori pueden parecer alejados pero que, bajo mi punto de vista, están íntimamente relacionados: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Compliance y Mediación Penal.<sup>7</sup>

Considero firmemente que la mediación tiene un largo camino por recorrer en nuestro país y necesita que se exploren nuevas áreas de implementación. Con este trabajo, persigo alcanzar cinco objetivos:

1. Determinar el concepto de Persona Jurídica e identificar cuáles son sujetos pasivos de Responsabilidad Penal.
2. Precisar los supuestos que pueden generar Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas.
3. Delimitar los criterios de imputación y exención de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas.
4. Concretar las circunstancias que atenúan la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
5. Valorar la idoneidad de la Mediación Penal en la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Para desarrollar este trabajo, se ha tratado seguir una estructura lógica, que se aglutina básicamente en tres áreas:

- Persona Jurídicas: a) Qué es y que no es; b) Personas jurídica incluida y excluida como sujeto de imputación de Responsabilidad Penal c) Cuáles son los criterios de imputación y exclusión de Responsabilidad Penal d) Supuestos que atenúan la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
- La reparación del daño como atenuante: a) Precedentes y funciones b) Experiencias en Derecho Comparado. c) Relación entre reparación y Mediación Penal como herramienta de Justicia Restaurativa.
- Posibilidades de la Mediación Penal en la Reparación del Daño causado por Personas Jurídicas.

Quisiera aprovechar esta ocasión, para expresar y manifestar mi más sincero agradecimiento y admiración a D. Vicente Magro Servet, ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y actualmente magistrado del Tribunal Supremo, por su apoyo y orientación para explorar un área más de la mediación, permitiéndome ofrecer una alternativa viable a las empresas que han depositado su confianza en mi organización que tiene como objetivo prestar servicios de mediación. Por ser uno de los sabios que marcan el camino a otros profesionales

---

<sup>7</sup> FEIJOO SÁNCHEZ, B.J. (2016). *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pág. 243 “La institución de la mediación resulta perfectamente compatible con la estimulación de los programas de cumplimiento de las propias RPPJ. Así, un programa eficaz de Compliance detectará en numerosas ocasiones, antes que ningún otro operador la comisión de un hecho delictivo en su ámbito organizativo. Parte de dicho programa consiste, precisamente, en investigar los hechos acontecidos y elaborar un plan de respuesta frente a los mismos, uno de los elementos del plan de respuesta en el marco de la gestión de la crisis apuntada es contactar a las posibles víctimas del delito y proceder, en su caso, a una reparación del daño que se ha causado a las mismas.

con humildad, cercanía, pasión, tenacidad y empuje a la innovación y excelencia de forma envidiable.

También a mi querida y admirada D<sup>a</sup> Virginia Domingo de la Fuente, Presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y actualmente profesora de la UNIR de Derecho Penal, por su disposición, cariño, profesionalidad, cercanía y esfuerzo diario en dar a conocer los valores y principios de la Justicia Restaurativa a la sociedad, colaborando en que este mundo sea mejor, más justo y más humano.

A mi profesor, D. Sergio de la Cámara Arroyo, por haberme iniciado en esta materia contagiándome su entusiasmo e ilusión, por sus clases que han sido un regalo, por sus explicaciones que son sabiduría y por su interés real en que sus alumnos y alumnas entiendan la finalidad del Derecho Penal. Gracias por ser un referente de profesionalidad, para mi y para muchos de los alumnos y alumnas de esta Universidad.

A mi director de Trabajo de Final de Grado, Dr. Manuel José Iglesias García, por sus observaciones emanadas de la experiencia, sus consejos para proponer una buena orientación a este trabajo, por su apoyo y ánimo constante ante todo tipo de adversidad.

A mi familia, mi esposo Carlos y mis hijos, Carlos e Iván, por sus renunciadas a salidas familiares, por aguantar mis largas noches de desvelo y la consiguiente irascibilidad, por el ser el motor que me levanta cada día e ilumina cada nuevo proyecto que acometo y ser un referente de constante aprendizaje en todas las áreas de la vida.

#### **IV. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS.**

##### **IV.I. Conceptualización de la Persona Jurídica.**

Una cuestión decisiva previa en el planteamiento del presente trabajo, consiste en determinar cuál es el concepto de persona jurídica del que se parte en el art. 31 bis CP. La reforma del Código Penal no facilita una definición de la persona jurídica penalmente responsable.<sup>8</sup>

Tampoco resulta útil en este sentido la enumeración contenida en el artículo 297 del CP ya que hace referencia fundamentalmente a las sociedades de naturaleza mercantil.

Según expresa el Tribunal Constitucional en su Sentencia número 11/1998 de 2 de junio, la persona jurídica solo puede ser rectamente concebida si se la conceptúa como un instrumento más de los que el Derecho pone al servicio de las personas

---

<sup>8</sup> En este sentido se pronuncian Feijoo Sánchez, B. J., en el capítulo II del *“Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Segunda”* Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. 2016. y la Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010. Pág. 1292.

físicas para que puedan actuar en el tráfico jurídico y alcanzar los más diversos fines de interés público y privado reconocidos por el propio ordenamiento<sup>9</sup>.

Al no adoptar el CP una definición de lo que se ha de entender por persona jurídica, no queda más remedio que concluir, que se trata de un concepto que se remite implícitamente a otras ramas del ordenamiento jurídico, abriendo las puertas a una casuística prácticamente inabarcable<sup>10</sup>. No obstante, tratando de abarcar este concepto de la forma más clara y concisa posible, me remitiré, tal y como propone D. Vicente Magro Servet a la legislación civil, mercantil y al Derecho societario.<sup>11</sup>

- Código Civil: El Art. 35 establece que son personas jurídicas: 1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.<sup>12</sup> Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen creado válidamente constituidas. 2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
- Código de Comercio: En lo que respecta a las sociedades mercantiles, el art. 116 regula el denominado “Contrato de Compañía”, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: En el art. 20 se indica que este tipo de sociedades exige escritura pública y que deben inscribirse en el Registro Mercantil. Por su parte, el art. 33 prevé que la sociedad adquiere la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido para su inscripción.

---

<sup>9</sup> Circular 1/2011, de la FGE, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010. Pág. 1292. En cuanto a los requisitos constitutivos de las diferentes formas asociativas y societarias reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, habrá de atenderse, en cada caso, a lo previsto en el Código Civil, el Código de Comercio y el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC). Conforme al artículo 20 de esta última norma, la constitución de las ahora llamadas sociedades de capital –cuya presencia es quizá la más frecuente en la práctica exigirá escritura pública que deberá inscribirse en el Registro Mercantil, mientras el artículo 33 prevé que la sociedad adquiere la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido con su inscripción.

Así pues, los nuevos sujetos pasivos del proceso penal, potenciales responsables de ilícitos de esa naturaleza, son las personas jurídicas privadas de Derecho civil y mercantil y algunas personas jurídicas públicas, constituyendo la ostentación de personalidad jurídica un primer filtro en este sentido, de modo que para aquellos otros entes colectivos que carezcan de la misma, se ha previsto un régimen diverso –de aplicación potestativa– en el artículo 129 del Código Penal según redacción del precepto dada por la Ley Orgánica 5/2010, corregida en algún extremo por Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

<sup>10</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. J y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pág. 57

<sup>11</sup> MAGRO SERVET, V.(2017): “Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance). Wolters Kluwer. Pag. 67

<sup>12</sup> LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.



Respecto de la naturaleza de la persona jurídica existen diferentes teorías al respecto, destacando:<sup>13</sup>

a) Teoría de la ficción: Entiende que la persona jurídica es exclusivamente una creación de la ley, estableciendo una ficción en virtud de la cual dichas organizaciones, independientes de los miembros que las forman, son personas y les otorga un tratamiento como tales.<sup>14</sup>

b) Teoría de la realidad: Considera que las personas jurídicas no son una creación del derecho, sino que existen en la realidad. Se trataría de organismos sociales y vivos que utilizan sus órganos para sobrevivir (igual que sucede en el caso de los seres humanos o personas físicas).

En cuanto a la capacidad de las personas jurídicas, cabe citar lo expuesto en el art. 38 CC: *“Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”*.

Por último citar la Circular 1/2011 relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010 de la Fiscalía.<sup>15</sup> En esta circular se señala que también tienen personalidad jurídica, las sociedades en formación y las irregulares, pudiendo ser potenciales responsables penales conforme a las previsiones del art. 31 bis del CP<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> SÁNCHEZ MARTÍN, M. Á. (2017) *“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Plan de Prevención de Riesgos Penales y Código de Conducta”*. Thomson Reuters Aranzadi. Primera Edición, En el capítulo III, realizada un estudio exhaustivo, más amplio y detallado respecto de las distintas teorías de la conceptualización de la Persona Jurídica realizando una comparativa entre las mismas y exponiendo algunos de los aspectos más controvertidos.

<sup>14</sup> Siguiendo esta teoría, en Nueva Zelanda se ha reconocido al río Whanganui la condición de persona jurídica, venerado por los maoríes en la Isla Norte. El río, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro de la minoría whanganui iwi (maorí). Y no es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce estatus de persona jurídica a un recurso natural, ya lo hizo en 2013 con el Parque Natural Te Urewera, en la Isla Norte.

<sup>15</sup> Sentencia TS nº 919/2002 de 11 de Octubre: “En cuanto a la existencia de la sociedad mercantil irregular es de tener en cuenta la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia de 8 de julio de 1993 que cita las de 3 de abril, 11 de junio y 6 de noviembre de 1991, según la cual: *“desde el momento que los contratantes se obligaron a poner en común determinados bienes con intención de obtener un lucro, ello denota la existencia de la sociedad de naturaleza mercantil”*.

<sup>16</sup> Circular 1/2011, de la FGE, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010. Pág. 1301. “



#### IV.II. Personas Jurídicas incluidas como sujetos de responsabilidad penal.<sup>17</sup>

Las PJ susceptibles de imputación de responsabilidad penal y siguiendo la clasificación propuesta por Velasco Núñez y Saura Alberdi, son:<sup>18</sup>

1.- *Las sociedades particulares* responden todas, lo que incluye Sociedades mercantiles (Art. 297 CP). Entre las más frecuentes encontramos las colectivas, comanditarias simples, anónimas, de responsabilidad limitada y otras sociedades mercantiles especiales como la unipersonal, comanditaria por acciones, laborales y sociedades de base mutualista como cooperativas, sociedades de garantía recíproca, o mutuas de seguro.

2.- *Las sociedades civiles o industriales y de interés público*: corporación, asociación, fundación (Art. 35 CC), entre los que se encuentran los Colegio Profesionales y Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales<sup>19</sup>, etc.

3.- *Las personas jurídicas públicas*: Responden penalmente las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, partidos políticos, sindicatos y Universidades Privadas.<sup>20</sup>

#### IV.III. Personas Jurídicas excluidas como sujetos de responsabilidad penal.

Las Personas Jurídicas Públicas exentas de responsabilidad penal son:<sup>21</sup> el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, Organismos Reguladores (Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Agencias (AECID, AEPSAD, AEMET, BOE, CSIC, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de Seguridad Aérea) y Entidades públicas Empresariales (ENAI-RE, Gestión de la Navegación Aérea, ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, RENFE, SASEMAR, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPI, Sociedad Estatal de

---

<sup>17</sup> SÁNCHEZ MARTÍN, M. Á. (2017) *“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Plan de Prevención de Riesgos Penales y Código de Conducta”*. Thomson Reuters Aranzadi. Primera Edición, realiza de forma exquisita y detallada una exposición muy amplia del tipo de sociedades que se incluyen dentro de la clasificación de sociedades particulares. Asimismo, expone la regulación de las sociedades civiles.

<sup>18</sup> VELASCO NÚÑEZ, E y SAURA ALBERDI, B. : *“Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance”*. Thomson Reuters Aranzadi. 2016. Pág 21.

<sup>19</sup> Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010. Pág. 1297: “La norma no menciona a las organizaciones empresariales, que por tanto se deben entender potenciales responsables penales.

<sup>20</sup> LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

<sup>21</sup> Artículo 31 CP quinquies 1 introducido por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Participaciones Industriales, organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.<sup>22</sup>

En el art. 31 quinquies 2 de la LO 10/1995, de 23 de noviembre del CP, introducido por LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, se señala que esta exención, no será aplicable cuando el Juez o Tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal, ya que en estos casos, como señalan Velasco Núñez y Saura Alberdi, se trataría de personas jurídicas creadas en fraude para evitar su imputación. Tampoco son consideradas a estos efectos las UTE, comunidades de bienes, joint venture<sup>23</sup> y Universidades Públicas (se les aplicaría las medidas accesorias del art. 29 CP).

Actualmente, el criterio de exclusión decisivo es la titularidad pública y el ejercicio de potestades públicas (anteriormente, el criterio de exclusión era el desempeño de políticas públicas o de interés general)<sup>24</sup>.

## V. SUPUESTOS QUE GENERAN RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

### V.I. Criterios de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica.<sup>25</sup>

Tal y como señala Rodríguez Ramos, las personas jurídicas no pueden ser autoras materiales de ningún delito, sino partícipes en el cometido por alguna de las

---

<sup>22</sup> Las Entidades públicas Empresariales, son una clase de organismo público perteneciente a la Administración General del Estado de España y se encuentran definidas en el art. 53 de la LOFAGE (Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), que las atribuye la realización de actividades prestacionales. La gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Son el resultado de un proceso de descentralización funcional de determinadas actividades públicas que anteriormente eran realizadas de forma centralizada por la Administración General del Estado. En este sentido se pronuncian Feijoo Sánchez, Bernardo José en el capítulo II del "Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Segunda" Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. 2016.

<sup>23</sup> Joint venture es una palabra inglesa que viene a decir colaboración empresarial; "joint" significa conjunto y "venture" empresa. Podemos definirlo como la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado durante un cierto periodo de tiempo y con la finalidad de obtener beneficios.

<sup>24</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M, FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. (2016) Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pag. 58.

<sup>25</sup> Art. 31 bis.1 L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: "las personas jurídicas serán penalmente responsables a) de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquéllos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

personas descritas en el Art. 31 bis.1 L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.<sup>26</sup>

No obstante, es conveniente señalar que la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la persona física que causa la acción.<sup>27</sup>

Tal y como apuntan Velasco Núñez y Saura Alberdi, esta autonomía se aprecia en que la PJ responde aunque no responda la persona física, bien porque ésta no haya podido ser individualizada o porque no haya sido posible dirigir el procedimiento contra la PF individualizada, en casos como la enajenación (art. 31 ter 1 CP), el fallecimiento o la sustracción a la acción de la justicia (art.31 ter 2 CP). Además, la exoneración de la responsabilidad penal de la PF no supone necesariamente la de la PJ.<sup>28</sup>

La atribución de Responsabilidad Penal a una Persona Jurídica, exige la concurrencia de dos tipos de hechos que deben quedar acreditados:<sup>29</sup>

1) El hecho de referencia o conexión –delito- cometido o intentado por parte de una persona física al servicio de la persona jurídica cuya responsabilidad penal se discute, siempre y cuando dichas personas físicas hayan actuado para beneficiar directa o indirectamente a la persona jurídica (aunque ese no hubiese sido ni su único ni su principal objetivo)<sup>30</sup>

2) El hecho propio de la persona jurídica por incumplir con su deber de organizar sus factores de producción de forma idónea o eficaz para no favorecer o incrementar – a consecuencia de su propia complejidad estructural el riesgo jurídico-penal de que una PF integrada en la persona PJ, cometiese, aprovechando la opacidad derivada de la complejidad de la organización, un delito en provecho de la misma, de tal modo que con dicha organización se desincentivase la comisión de esos delitos por parte de las PF a su servicio<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> RODRÍGUEZ RAMOS, L. (2016) “Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas” (Al hilo de las SSTs 514/2015, 154 y 221/2016)”, Diario La Ley, nº 8766, Sección Doctrina, Ref. D-210, Editorial La Ley.

<sup>27</sup> VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, B. (2016): “Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance”. Thomson Reuters Aranzadi. Pág 24.

<sup>28</sup> Sentencia nº 514/2015 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en delito de estafa.

<sup>29</sup> En el mismo sentido se pronuncian SERRANO ZARAGOZA, Ó.: “Reestructuración empresarial y responsabilidad penal de la persona jurídica Fiscal de Delitos Económicos”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 24, Sección Ponencias y Estudios /IV Congreso Internacional: La reforma del Derecho Concursal. Balance, Primer semestre de 2016, Editorial La Ley y MORAL, M.T y GONZÁLEZ, B. en el artículo de Fundesem Business School, febrero 2015 publicado por Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

<sup>30</sup> Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO 1/2015. indica tanto provecho como beneficio, hacen alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc, provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la PJ”

<sup>31</sup> MAGRO SERVET, V: (2017) “Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)”. Wolters Kluwer. Pag. 79

Lo que convierte el delito de la persona física en un “hecho de empresa o de la entidad” es que los hechos se hayan podido realizar por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control por parte de los principales gestores de la entidad.<sup>32</sup>

Velasco Núñez y Saura Alberdi, señalan que la Personas Jurídicas, responde por los delitos cometidos “por la empresa” y no necesariamente por los delitos cometidos “en la empresa”. Así, la PJ quedaría excluida de responsabilidad:<sup>33</sup>

- a. Cuando se cometan delitos en el seno de la empresa que no estén incluidos dentro del catálogo de los comisibles por PJ (un empleado que por orden de la dirección acosa laboralmente a un subordinado para intentar que se marche voluntariamente)
- b. Cuando la actuación del subordinado no se produce fuera del ejercicio de las actividades sociales (un directivo que aprovechando que un directivo de la competencia deja su portátil sobre la mesa, accede sin permiso a sus correos personales)
- c. Cuando se cometen hechos en contra de los intereses de la sociedad en beneficio exclusivo de un integrante de la misma (cuando un trabajador o mando de la empresa se apodera sin permiso de datos informáticos de la misma y los vende a la competencia para su uso exclusivo. Si no concurren los elementos concretados en el art. 31 bis para la PJ, no hay culpabilidad, ni reprochabilidad y por tanto tampoco imputación.

## V.II. Delitos que pueden cometer las empresas:

El CP establece un numerus clausus de delitos que pueden cometer las empresas:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Respecto de los deberes de supervisión, vigilancia y control de las empresas, así como del importante matiz que supone la expresión “gravemente los deberes”, podemos profundizar al respecto en los trabajos de BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016). *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pág. 84-88, FEIJOO SÁNCHEZ, *Derecho Penal de la Empresa*, pág. 192 ss.; SILVA SÁNCHEZ: *Fundamentos del Derecho Penal en la Empresa*, pág. 153 ss, DE VICENTE REMESAL, *Control de riesgos en la empresa y responsabilidad penal* Revista Penal nº 34 – 2014 pág. 170 ss. haciéndose referencia a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado que aborda en su punto 2.5. páginas 20-26, el incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la letra b) del artículo 31 bis 1. Entre los aspectos más importantes y que deben ser matizados se encuentran: a) Se trata de un incumplimiento de las personas físicas, por dolo o imprudencia grave, y no una culpabilidad por “defecto de organización” de la persona jurídica. b) la introducción de “gravemente” permite dejar fuera del ámbito penal aquellos incumplimientos de escasa entidad, es decir, para las infracciones menos graves de los deberes de control solo caben las sanciones administrativas. c) los deberes de supervisión, vigilancia y control. En el art. 225 de la Ley de Sociedades de Capital, se impone a los administradores el deber de diligencia “de un ordenado empresario” exigiéndoles adoptar “las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad” y del art. 249 bis, se deduce que la supervisión resulta una de las facultades indelegables por el consejo de administración en relación con el “efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado” siendo ésta una facultad indelegable en las sociedades cotizadas y que se extiende a “la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control”

<sup>33</sup> VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, B. (2016) “*Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance*”. Thomson Reuters Aranzadi. Pág 26.

<sup>34</sup> Circular 1/2011, de la FGE, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010 y MAGRO SERVET, V. (2017) “*Guía práctica*

- 
- ✓ Tráfico ilegal de órganos (CP art. 156 bis).
  - ✓ Trata de seres humanos (CP art. 177 bis).
  - ✓ Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (CP art. 189 bis).
  - ✓ Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (CP art. 197).
  - ✓ Estafas (CP art. 251 bis).
  - ✓ Frustración de la ejecución (CP art. 258 ter)
  - ✓ Insolvencias punibles (CP art. 261 bis).
  - ✓ Daños informáticos (CP art. 264).
  - ✓ Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (CP art. 288).
  - ✓ Blanqueo de capitales (CP art. 302).
  - ✓ Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social (CP art. 310 bis).
  - ✓ Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (CP art. 318 bis).
  - ✓ Delitos de construcción, edificación y urbanización (CP art. 319).
  - ✓ Delitos contra el medioambiente (CP arts. 327 y 328).
  - ✓ Delitos relativos a la energía nuclear (CP art. 343).
  - ✓ Delitos de riesgo provocados por explosivos (CP art. 348).
  - ✓ Delitos contra la salud pública (CP art. 369 bis).
  - ✓ Falsedad de medios de pago (CP art. 399 bis).
  - ✓ Cohecho (CP art. 427).
  - ✓ Tráfico de influencias (CP art. 430).
  - ✓ Corrupción de funcionario público extranjero (CP art. 445).
  - ✓ Delitos de organización (CP art. 570 quarter).

---

*sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)*. Wolters Kluwer. Pág. 293-302.



- ✓ Financiación del terrorismo (CP art. 576 bis).
- ✓ Contrabando (Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando).

Añade MAGRO SERVET que los delitos societarios, de acoso laboral, de incendios así como los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores no permiten derivar responsabilidad penal a la empresa.<sup>35</sup>

Por la redacción dada al art. 318 del CP, respecto de los delitos contra los derechos de los trabajadores, cabría preguntarse si serían comisibles por la PJ.<sup>36</sup>

Al respecto, se pronuncian varios autores en la línea de MAGRO SERVET, concluyendo que este tipo de delito no podría ser atribuido a la PJ.<sup>37</sup>

En concreto, la inclusión del delito contra los derechos de los trabajadores ha sido un tema muy debatido. Personalmente, me uno a la propuesta de VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI, en que los delitos contra los derechos de los trabajadores se conviertan en delitos comisibles por las personas jurídicas.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Vid. MAGRO SERVET, Vicente: "Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance). Wolters Kluwer. Pág. 303

<sup>36</sup> Art. 318 del CP respecto de los delitos contra los derechos de los trabajadores: "*Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código*".

<sup>37</sup> MANZANARES SAMANIEGO, J.L. (2016): "Comentarios al Código Penal" (Tras las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de marzo, y 2/2015, de 30 de marzo). Dykinson 2ª Edición. Pág. 83 "hechos atribuidos a la persona jurídica únicamente afectan por vía de responsabilidad penal a las personas físicas y por vía de consecuencias accesorias de la pena a la empresa, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica". MAGRO SERVET, Vicente: "Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance). Wolters Kluwer. Pág. 75.

"Ratifica que se les podrán aplicar las medidas del art. 129 CP al cometerse en el seno de una persona jurídica, pero no se le aplicarán las penas del art. 33.7 del CP. VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, B. (2016): "*Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance*. Thomson Reuters Aranzadi. Pág 20 "entendemos que los delitos contra los derechos de los trabajadores no son comisibles por PJ por las siguientes razones: a) La pena se impone al administrador o encargado del servicio que haya sido responsable de los hechos y a quien, conociéndolos y pudiéndolos remediar, no haya adoptado medidas para ello. Lo que significa que no se impone la pena a la persona física, sino a estas personas físicas. b) Las penas previstas para estas personas físicas serán las privativas de libertad que se señalan en los artículos 311 y siguientes. Además, se les puede imponer las penas del art. 129 CP, lo que impide la aplicación de multa y de disolución, que si serían de aplicación en el caso de remisión a las penas previstas para la persona jurídica en el art. 33.7 CP. c) Disponer de un Plan de Prevención de Delitos (compliance penal) respecto de esos delitos no está previsto como atenuante, ni eximente de la responsabilidad de los administradores, salvo que se entienda que hacerlos supone adoptar las medidas de "remedio" a las que se refiere el art. 318 CP.

<sup>38</sup> VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, B. (2016): "*Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance*. Thomson Reuters Aranzadi. Pág 86 "Proponen que los siguientes delitos se conviertan en delitos comisibles por las personas jurídicas: a) el delito de imprudencia grave, o menos grave, con resultado de muerte, con el que resolver penalmente situaciones en las que por la muerte del conductor, maquinista, capitán de buque o del piloto, se producen muertes masivas por accidente, que podrían en ocasiones evitarse implementando políticas de prevención penal b) Ciertas modalidad es de acoso como el inmobiliario, el laboral, en los que

## VI. CRITERIOS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA.

En el Art. 31 bis 2 L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, regula una serie de condiciones por las cuales la PJ quedará exenta de responsabilidad. A saber:

a) Si el delito fuese cometido por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estuviesen autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentasen facultades de organización y control dentro de la misma:

1.<sup>a</sup> El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión

2.<sup>a</sup> La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica

3.<sup>a</sup> Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.

4.<sup>a</sup> No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.<sup>a</sup>

b) Si el delito fuera cometido por las personas por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.<sup>39</sup>

---

habitualmente prima el interés de la empresa sobre el de la PF concreta que realiza la acción c) los delitos de administración desleal y los de apropiación indebida, para evitar abusos en tarificaciones y facturación d) delitos de fraude de fluido eléctrico y análogos e) los delitos contra los derechos de los trabajadores f) el quebrantamiento de condena y delito de desobediencia, para evitar situaciones como la ocurrida en Estados Unidos con una multinacional de servicios informáticos que ha desobedecido una resolución judicial en la que se le requería la cesión de datos de un teléfono móvil propiedad de un terrorista.

<sup>39</sup> En el Art. 31 bis 5 L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se señala que los modelos de organización y gestión deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y



## VII. CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

En el artículo 31 quáter introducido por el número veintidós del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del CP se indica: “Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las PJ haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

- a. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
- b. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
- c. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
- d. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

No obstante, cabe decir al respecto que aunque la mayor parte de autores ha asumido que se trata de un sistema cerrado y tasado “*numerus clausus*”, autores como VELASCO NÚÑEZ<sup>40</sup> y SAURA ALBERDI entienden que no está suficientemente justificada la exclusión de las atenuantes genéricas del art. 21 CP.

Por su parte, FEIJOO SÁNCHEZ<sup>41</sup> señala que el hecho de que las PJ no puedan beneficiarse de la atenuante de dilaciones indebidas (codificada expresamente como causa como causa de atenuación de la responsabilidad) y la PF sí, da lugar a situación de desigualdad tal que las soluciones hayan pasado por considerar inconstitucional el sistema hasta salvar la constitucionalidad del precepto teniendo

---

de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

<sup>40</sup> VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, B. (2016): “*Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance*”. Thomson Reuters Aranzadi. 2016. Pág 33

<sup>41</sup> FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. (2016) *Estudios*, pág. 129 ss y el mismo en *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. 2016 pág. 223; CIRCULAR 1/2011 DE LA FGE, PÁG, 51-109; MAGRO SERVET, V.: “Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)”. Wolters Kluwer. Pag. 145

en cuenta los supuestos contemplados como factores de determinación de la pena, en la línea de VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI.<sup>42</sup>

Una de las características comunes a las atenuantes es su carácter ex post derivada de la redacción del art 31 quater introducido por LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el que se establece: “*Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito...*” dejando abierta la posibilidad de que sean consideradas como eximentes en caso de haberse producido con anterioridad.<sup>43</sup>

Dado que el objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la oportuna vinculación existente entre los mecanismos de solución alternativa de conflictos, en concreto de la Mediación Penal y la atenuante de responsabilidad penal de las PJ: “Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito”, en adelante, se desarrolla sólo esta circunstancia.

FEIJOO SÁNCHEZ, apunta que esta atenuante abre nuevas posibilidades transaccionales entre los representantes legales de las personas jurídicas y los perjudicados por el delito.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016). *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pág. 223

<sup>43</sup> Art. 31 quater introducido por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: “Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

<sup>44</sup> FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. (2017) *Estudios de Derecho Penal*. Pág. 134.

## VIII. PRECEDENTES Y FUNCIONES DE LA REPARACIÓN - ART. 31 QUATER c) CP -

Puede concluirse que la atenuante de reparación de las Persona Física es el antecedente más importante y que debe interpretarse de la misma manera que para la Persona Jurídica.<sup>45</sup>

En este sentido, GOENA VIVES señala que el art. 21.5 CP<sup>46</sup> aboga por una autonomía de la reparación penal respecto de la civil, (en el sentido de las tendencias de lo que se entiende reparación en el derecho comparado) señalando que en Derecho Penal, el fin de la exigencia de la responsabilidad trata de mermar el daño social así como reafirmar la vigencia del orden jurídico, el daño así, se identifica con la desestabilización del orden social.<sup>47</sup>

Así, no basta con fundamentar la atenuante de reparación en realizar un pago que satisfaga a la víctima (finalidad del Derecho Civil), adicionalmente debe revestir un carácter simbólico donde el infractor debe reconocer la necesidad de respeto al Derecho (efecto pacificador) y muestre una disponibilidad activa para disminuir el daño ocasionado que pueda resultar equivalente o mayor que el resarcimiento económico.

Como se verá en el siguiente apartado, las experiencias de derecho comparado analizadas ponen de manifiesto que la reparación prevista en el art. 31 quáter c) pueden considerarse en el mismo sentido en razón de quien debe practicarla.

A los efectos de determinación de la pena, las atenuantes que consisten en un mero resarcimiento económico operan igual que las que van más allá. En este sentido, me parece muy interesante poner en valor la propuesta realizada por Goena Vives de apreciar la atenuante del art. 31 quáter c) como muy calificada y que como expone, ésta vendría determinada por el art. 66 bis, introducido por el apartado decimoctavo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.<sup>48</sup>

Siguiendo lo dispuesto en el mismo, podría apreciarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Esto justificaría la rebaja de la pena hasta en dos grados a la señalada por la ley.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> ROMA BALDES, A. (2013). *Responsabilidad penal de las PJ. Manual sobre su tratamiento penal y procesal*. Madrid. Rasche, Pág. 64 FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. (2016) *Estudios sobre las reformas* Pág. 134. GOENA VIVES, B. (2017): *“Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica”*. Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid. Pág. 195.

<sup>46</sup> Art. 21.5ª C. Penal: “La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral”.

<sup>47</sup> GOENA VIVES, B. (2017): *“Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica”*. Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid. Pág. 196.

<sup>48</sup> GOENA VIVES, B. (2017): *“Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica”*. Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid. Pág. 323.

<sup>49</sup> Art. 66 CP 1.2.ª “Cuando concurren dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concorra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes”.

De acuerdo con lo señalado en la STS 50/2008, de 29 de enero, es procedente apreciar la reparación como muy cualificada cuando el funcionamiento de la atenuación se da con mayor intensidad.<sup>50</sup>

## IX. LA REPARACIÓN EN DERECHO COMPARADO

Apunta Alcácer Guirao, que la reparación se configura como un medio para la consecución de los fines penales preventivos, por lo que el núcleo de interés del Derecho Penal no puede ser el daño individual, sino la lesividad social y las potenciales víctimas.<sup>51</sup>

Por su parte, Roxin, señala que la reparación no solo tiene importancia para la medición de la pena, sino que representa una novedosa forma de sanción que aparece, independientemente, al lado de las penas y de las medidas de corrección y seguridad. Su autonomía reside en que es el propio autor quien tiene que asumir la responsabilidad y colaborar activamente para restablecer la paz perturbada.<sup>52</sup>

**IX.I. Alemania:** La inclusión de la reparación en el sistema penal de sanciones, va vinculado al esfuerzo por alcanzar un acuerdo de compensación, lo que denomina Claus Roxin<sup>53</sup> una reconciliación entre el autor y la víctima. La realización de este esfuerzo debe llegar a una atenuación de la pena, a una suspensión condicional a prueba de la pena o incluso a una renuncia de la pena si el autor repara los daños producidos y se esfuerza por alcanzar una reconciliación con la víctima. En el año 1994, se introdujo en el Código Penal Alemán en su artículo 46<sup>a</sup> (a modo de atenuante e inclusive prescindir de ella en casos de pena privativa de libertad hasta máximo un año.)<sup>54</sup>

Para apreciarse esta atenuante debe demostrarse que el autor se ha esforzado por alcanzar un acuerdo de compensación con la víctima, ha reparado completamente o

---

<sup>50</sup> STS 50/2008, de 29 de enero siendo ponente Colmenero Méndez de Lurca: “el acusado no se limitó a entregar una cantidad de dinero por el total de la indemnización, sino que llegó antes a un acuerdo con el lesionado al que incorporó una expresa petición de perdón, lo que, no pudiendo tacharse de una actitud meramente formal o insincera, que transformaría lo ocurrido en una mera apariencia sin sustrato real alguno, sin duda refleja una actitud de reconocimiento del orden jurídico y supone al tiempo una reparación moral, indicativa del esfuerzo por expresar el retorno al orden jurídico, que supera la mera reparación económica y que debe ser tenida en cuenta”

<sup>51</sup> ALCÁCER GUIRAO, R. (2011) “*Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso*”. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid. Pág. 114

<sup>52</sup> ROXIN, C. (1991) “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones”. Jornadas sobre la reforma del derecho penal en Alemania. Ed, cuadernos del Consejo General del Poder Judicial. Madrid. Pág.13

<sup>53</sup> ROXIN, C. (1991) “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones”. Jornadas sobre la reforma del derecho penal en Alemania. Ed, cuadernos del Consejo General del Poder Judicial. Madrid. Pág.58.

<sup>54</sup> Código Penal Alemán sujeto a la traducción de LÓPEZ DIAZ, C. Art. 46a. Arreglo entre autor y víctima, reparación del daño. Si el autor: 1. en su empeño para lograr un acuerdo con el lesionado (arreglo autor-víctima) haya reparado su hecho enteramente o en su mayor parte o este aspirando seriamente a su reparación; o, 2. en el caso en que la reparación del daño haya exigido por él un considerable desempeño personal o una renuncia importante, indemniza a la víctima enteramente o en su mayor parte, entonces el tribunal puede atenuar la pena de acuerdo con el § 49 inciso primero o, puede prescindir de la pena cuando no se ha incurrido en pena grave tal como privación de la libertad hasta un año o multa hasta 360 importes diarios.

en su mayor parte el hecho cometido o intenta hacerlo aunque no se alcance acuerdo entre la víctima y el autor cuando éste último aporte una reparación del daño que le exija esfuerzos personales importantes. Es importante señalar, que el Ministerio Fiscal y el tribunal deben examinar, en cualquier momento del proceso, la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo de compensación. En este modelo no es el perjudicado quien reclama y tampoco el juez quien condena. Para valorar esta “atenuante”, es el autor quien sin reclamación y sin condena aporta una prestación reparadora dirigida a la reconciliación.<sup>55</sup>

IX.II. Derecho Angloamericano: La reparación es concebida como una pena o como medida pactada. Así, el capítulo 8B de CP se prevén las siguientes penas de reparación que buscan remediar el daño ocasionado por el delito:

- a) Reparación o restitution orders para daños evaluables económicamente.
- b) Las “remedial orders” para daños que no son evaluables económicamente o para los que la restitución resulta insuficiente.
- c) Los trabajos en beneficio de la comunidad, cuando la empresa posea un conocimiento que la haga especialmente idónea para reparar el daño.
- d) La notificación a las víctimas, con un importante coste reputacional para la empresa.

En el ordenamiento jurídico se prevé la posibilidad de interrumpir el proceso penal contra una empresa aplicando las ADR así, en lugar de imponerse una sanción en un proceso penal pueden pactarse como forma de evitar el proceso penal.<sup>56</sup>

IX.III. Francia: Díaz López, J.A. afirma que conforme al ordenamiento francés, se ha valorado positivamente el recurso a la mediación, con participación de personas jurídicas como supuestos autores, para eludir o disminuir su responsabilidad penal en delitos medio ambientales. Este autor, a su vez, basándose en la teoría y práctica francesa respecto de la RP de las PJ, plantea una interesante propuesta para implementar la mediación penal en delitos patrimoniales cometidos entre parientes y responsabilidad penal de las personas jurídicas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Código Penal Alemán sujeto a la traducción de LÓPEZ DIAZ, C. 46a. Arreglo entre autor y víctima, reparación del daño. Si el autor: 1. en su empeño para lograr un acuerdo con el lesionado (arreglo autor-víctima) haya reparado su hecho enteramente o en su mayor parte o este aspirando seriamente a su reparación; o, 2. en el caso en que la reparación del daño haya exigido por él un considerable desempeño personal o una renuncia importante, indemniza a la víctima enteramente o en su mayor parte, entonces el tribunal puede atenuar la pena de acuerdo con el 49 inciso primero o, puede prescindir de la pena cuando no se ha incurrido en pena grave tal como privación de la libertad hasta un año o multa hasta 360 importes diarios.

<sup>56</sup> ADR (Alternativas de Resolución de conflictos: Negociación, Mediación, Arbitraje y Derecho Colaborativo)

<sup>57</sup> DÍAZ LÓPEZ, J. A. (2011) *Propuestas para la práctica de la mediación penal. Delitos patrimoniales cometidos entre parientes y responsabilidad penal de las personas jurídicas* Revista para el Análisis del Derecho. Pág. 29 ss.

## X. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

### XI. Justicia Restaurativa:

La ONU indica que la Justicia Restaurativa es una forma de responder al comportamiento criminal equilibrando las necesidades de la comunidad, las víctimas y los delincuentes.<sup>58</sup>

Se trata de un concepto en evolución que ha dado lugar a diferentes interpretaciones en diferentes países, y en torno al cual no existe un consenso perfecto. Ello se debe en parte, a las dificultades para traducir con precisión el concepto en diferentes idiomas y a la variedad de terminología que se utiliza a menudo. También podemos hacer alusión a que no tiene un proceso determinado ni se trata de un modelo puro, ya que como señala Domingo de la Fuente, V. el modelo debe adaptarse a las características del lugar donde se ponga en práctica y también, al caso en cuestión, siendo los mismos diferentes unos de otros.

Se una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas, infractores y comunidad”.<sup>59</sup>

- Goena Vives, B. señala que se trata de un nuevo paradigma multidimensional que surge como renuncia al abandono de la víctima en la resolución del conflicto penal.<sup>60</sup>
- Olalde Atarejos J.A. destaca su carácter internacional y señala que el paradigma restaurativo enfatiza el hecho de que la persona ofensora tiene responsabilidades que satisfacer hacia las personas a quienes ha dañado, no solamente acometiendo reparaciones, incluyendo las simbólicas, sino reparando las relaciones deterioradas entre ella y la víctima.<sup>61</sup>
- Domingo de la Fuente, V. identifica como actores básicos a la comunidad, el infractor y víctima.<sup>62</sup>
- Etxebarria Zarrabeitia, J. apunta que la JR trata de superar el concepto de justicia punitiva.<sup>63</sup> En el mismo sentido, en la superación del concepto de

---

<sup>58</sup> UNITED NATIONS (2006) *Manual sobre programas de JR*. Serie de manuales sobre justicia penal. Pág.6

<sup>59</sup> Domingo de la Fuente, V. (2008) “*Justicia Restaurativa y mediación penal*”. Revista de derecho penal, (Lex Nova) ISSN 1576-9763, nº 23, 2008 págs. 4 y ss.

<sup>60</sup> GOENA VIVES, B. (2017): “*Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica*”. Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid. Pág 317

<sup>61</sup> OLALDE ATAREJOS, J.A. (2017) *40 Ideas para la práctica de la Justicia Restaurativa en la Jurisdicción Penal*. Dykinson Pág.41 (compara el paradigma retributivo con el restaurativo, respecto del retributivo/punitivo (este autor los asimila aunque no para todos es lo mismo) indica que tiene a enfatizar el castigo penal y la estigmatización. En esta visión, el Estado asume la posición de la víctima y toma un rol activo para abordar el delito a través de la persona responsable, usando la pena privativa de libertad u otras formas de disuasión).

<sup>62</sup> DOMINGO DE LA FUENTE, V. Se observará que atendiendo a las indicaciones para la realización de este trabajo he tratado no utilizar webgrafía, pero por su calidad, en este apartado he realizado una exclusión. <http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es>

<sup>63</sup> ETXEBARRIA ZARRABEITIA, J. (2011) “*Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso*”. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas



justicia punitiva (lo importante es la pena, castigar al infractor que ha cometido el delito) se pronuncia Martínez Escamilla, M.<sup>64</sup>

De entre las muchas definiciones que se dan de Justicia Restaurativa, Cámara Arroyo, S.<sup>65</sup> destaca la de Marshall “La JR es un proceso mediante el cual todas las partes implicadas en un delito en particular se reúnen para resolver colectivamente la manera de afrontar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.”<sup>66</sup>

Respecto de los programas de JR, la ONU identifica como los principales: a) mediación entre víctima y delincuente; b) comunidad y conferencias de grupos familiares c) sentencias en círculos d) círculos promotores de paz y e) libertad condicional reparativa y juntas y paneles comunitarios.<sup>67</sup>

## XII. Mediación Penal:

Tal y como apunta Olalde Otarejos, la mediación (se decanta por denominar a este proceso mediación reparadora y no mediación penal).<sup>68</sup>:

- Es un proceso que permite encontrarse a víctima y persona ofensora cara a cara o de forma indirecta
- Hablar acerca del impacto del delito para desarrollar un plan de reparación en un espacio seguro y estructurado
- Con la asistencia de una persona mediadora (propone denominarla facilitadora para distinguir de los procesos de mediación civil y mercantil).<sup>69</sup>

El Consejo de Europa a través de la Recomendación R (99) 19 define la mediación como un proceso a través del cual permite a la víctima y a la persona ofensora, si lo consienten de forma libre, participar activamente en la resolución de las cuestiones derivadas del delito mediante la ayuda de una tercera parte imparcial.

---

Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid. Pág. 60 “La justicia punitiva parte de que la definición de unos hechos como delictivos y su amenaza con una pena (y luego con su aplicación y ejecución) es el modo de evitar que se produzcan o se reproduzcan. Su acción se dirige por tanto a esclarecer quién ha cometido el delito y a quién imponerle una pena que ha de ser ejecutada. Un sistema de justicia penal que participe del paradigma de la justicia restaurativa no centra su atención exclusiva en el autor y su sanción, sino que desplaza también su atención a la víctima y a lo que hay debajo del delito.

<sup>64</sup> MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. y SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. P. (2011): “*Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso*. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid, 2011. Pág. 20

<sup>65</sup> CÁMARA ARROYO, S. (2011) Revista de Justicia Restaurativa nº 1 pág. 9

<sup>66</sup> OB. Cit. en CÁMARA ARROYO, S. (2011) Revista de Justicia Restaurativa nº 1 pág. 9 Marshall, Tony (1999) “*The evolution of restorative justice in Britain*”, en European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 4, Nº 4, London, 1996, p. 37.

<sup>67</sup> UNITED NATIONS (2006) Manual sobre programas de JR. Serie de manuales sobre justicia penal. Pág.6

<sup>68</sup> OLALDE ATAREJOS, J.A. (2017) *40 Ideas para la práctica de la Justicia Restaurativa en la Jurisdicción Penal*. Dykinson Pág.41 Pág.313

<sup>69</sup> En el mismo sentido Sáez Valcárcel, R. (2007) *La mediación reparadora en el proceso penal “reflexión a partir de una experiencia*, ESCAMILLA MARTÍNEZ, M. y ETXEBARRIA ZARRABEITIA, J. (2011) “*Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso*. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid, y Domingo de la Fuente, V. en <http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es>



En España, la mediación penal no tiene una regulación expresa, aunque por parte del Consejo General del Poder Judicial, se han puesto en marcha y en diferentes órganos judiciales, proyectos piloto de mediación penal con menores y adultos<sup>70</sup>, apoyados en protocolos específicos y tras los análisis de las inspecciones realizadas a los servicios de mediación intrajudicial, se constatan beneficios en el abordaje del conflicto por la existencia de incidentes en la ejecución de la sentencia y la pacificación incluso cuando no hay acta de reparación.<sup>71</sup>

En Madrid también se llevan a cabo procesos de mediación para casos concretos como lo es en materia de negligencias médicas.<sup>72</sup>

Tal y como señala Pascual Rodríguez, E. en su memoria de Mediación Penal para optar al grado de doctor, en nuestro país no hay todavía experiencia de mediación penal en responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero es cierto, que tenemos experiencias en mediación cuando las personas jurídicas son las perjudicadas de la infracción penal. Estos suelen ser casos de hurto, robo con fuerza, daño o deslucimiento de inmuebles en grandes superficies comerciales.<sup>73</sup>

En estos casos, la mediación es vista por las personas jurídicas como un medio idóneo para obtener la reparación del daño como sería la eliminación y/o limpieza de un graffiti, reposición del bien sustraído. También tiene un efecto de prevención en los menores delincuentes facilitando la reducción del número de reincidencias por el mismo hecho.

Es posible que a lo largo de este año, y partiendo de la iniciativa de algún magistrado innovador, se ponga en marcha el primer proyecto piloto que contemple la mediación penal (reparadora) con la figura de las Personas Jurídicas.

Este punto, al igual que muchos de los que he tratado hasta ahora, daría para varias tesis y se excede del objetivo último que persigo con esta exposición.

---

<sup>70</sup> Si bien en la legislación penal de adultos la mediación no se contempla, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal establece que: "Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales [...]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculcado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación [...]. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo de 2006" (arts. 10 y 17).

<sup>71</sup> Extracto de la presentación que realizó D<sup>a</sup> Ana Carrascosa en el CGPJ con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación el pasado 21 de enero de 2018)

<sup>72</sup> Desde el año 2012, se viene desarrollando Mediación Penal con víctimas de negligencias médicas en juzgados de Madrid, si bien, Rosa María Hernando, que era la coordinadora del Servicio de Mediación Penal en Madrid asumido por la Fiscalía, aludía en uno de los cursos que tuvimos oportunidad de dirigir en esta materia para el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que uno de los requisitos necesarios para participar en el proceso era que el profesional reconociese la culpa.

<sup>73</sup> Pascual Rodríguez, E. (2012) *La Mediación en el Sistema Penal*. Memoria dirigida por Martínez Escamilla, Margarita para optar al grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

## XI. VENTAJAS DE APLICAR LA INSTITUCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN NUESTRO SISTEMA PENAL.

### XI.I. Ventajas de la mediación para la víctima:

1. Las víctimas se ven resarcidas tempranamente del daño sufrido. (Feijoo Sánchez B.J.)<sup>74</sup>
2. La víctima “resulta indemnizada rápidamente sin ningún coste ni esfuerzo propio (en el sistema anterior, la víctima invertía mucho tiempo y dinero para reclamar ante un tribunal y el propio proceso penal impedía que alguna vez recibiese indemnización, ya que si se priva de libertad al encerrado, tampoco puede ganar dinero para indemnizar a la víctima y aunque fuese una sanción pequeña, disminuiría su capacidad económica y también la voluntad de pagar algo adicionalmente a la víctima). En definitiva, la punición del autor reporta perjuicios a la víctima. (Claus Roxin)<sup>75</sup>
3. Participar directamente en la solución de la situación y de las consecuencias del delito
4. Recibir respuestas a sus preguntas sobre el delito y el delincuente.
5. Expresar el impacto del delito sobre ellos.
6. Recibir una disculpa.
7. Restaurar cuando sea adecuado, la relación con el delincuente y lograr un cierre. (ONU)<sup>76</sup>
8. Obtener información sobre su caso.
9. La víctima puede recibir información sobre ciertos aspectos de su proceso que no obtendría por otros medios.
10. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados, inclusive cuando no hay víctima concreta, puede estimarse el conjunto de la población que ha resultado dañada.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M. FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. Pág. 242 “Pudiera pensarse, no sin razón, que en el momento en que una PJ procede a la reparación de ese daño, se produce una tácita asunción de culpabilidad. Sin embargo, precisamente lo que trata de evitar la PJ es que se tilde su actuación en el pasado de culpable. Por ello, resulta fundamental que por los Tribunales no se interprete la reparación de un daño como una asunción de responsabilidad penal. En este sentido, pudiera servir de criterio orientador que la PJ, desde la perspectiva del Derecho Civil –donde imperan, a diferencia del Derecho Penal, las reglas de la responsabilidad objetiva- puede ser responsable, y por eso se procede a la reparación civil del daño, sin que ello ninguna asunción de responsabilidad en el ámbito penal”.

<sup>75</sup> Roxin, C. (1991) “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones”. Jornadas sobre la reforma del derecho penal en Alemania. Ed, cuadernos del consejo general del poder judicial. Madrid pp. 119 y ss. En nuestro sistema penal, no podrían aducirse el mismo tipo de ventajas, no obstante, he querido identificar todas las ventajas que identifica ROXIN con el objetivo de ensalzar la importancia de desarrollar en nuestro sistema normativa específica que desarrolle y regule el ámbito, procedimientos, principios etc....para propiciar la mediación en el ámbito penal. A esta necesidad ya se refirió el Ministro Catalá en la declaración del Día Europeo de la Mediación del 2017.

<sup>76</sup> UNITED NATIONS (2006) Manual sobre programas de JR. Serie de manuales sobre justicia penal. Pág.17

<sup>77</sup> Domingo de la Fuente, V. (2012): “Análisis de la mediación y la Justicia Restaurativa como derecho de las Víctimas”. Me parece interesante destacar este artículo porque en el mismo, la autora presenta a la Justicia Restaurativa como un derecho de las víctimas enmarcado en la Ley 4/2015, de 27 de abril, por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima del Delito. Destacando las referencias directas a Justicia Restaurativa cabe citar: El Estatuto en su artículo 5 k) establece que las víctimas tienen derecho a recibir información sobre los: “Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible” y en su art. 15 habla expresamente de los Servicios de Justicia

## **XI.II. Ventajas de la mediación para la PJ:**

1. Efectuar la pronta reparación con anterioridad al juicio oral, será mucho más beneficioso con el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima que si se produjera (como ocurre en nuestra justicia penal) tras un largo proceso penal, una vez concluida sus dos instancias.
2. El hecho de que la vía de la mediación proporcione mayor confidencialidad a todo el proceso puede constituir, sin duda, una ventaja importante para la PJ cumplidora de la legalidad que, al mismo tiempo, no quiere renunciar a ninguno de sus derechos. Ligado a esto, podemos concluir que la Mediación Penal evita importantes costes reputacionales. (Magro Servet, V.)<sup>78</sup>
3. Puede controlar el desarrollo del procedimiento de mediación en mayor medida que controla el procedimiento penal (en el sentido de colaborar con la fiscalía o juez/a instructor/a en la investigación del hecho aportando pruebas, con objetivo de utilizarlo como atenuante ya que no se garantiza que éstos, guiados por el principio de legalidad y no el de oportunidad, utilicen la formación obtenida para continuar con el proceso penal contra la PJ. (Gómez-Jara Díez)<sup>79</sup>
4. Tiene la posibilidad de reducir su pena e incluso obtener una suspensión condicionada a la prueba de la misma mediante una reparación rápida y voluntaria. Tanto desde el punto de vista personal como social, se motiva al autor para emplee todas sus fuerzas e imaginación para alcanzar un acuerdo de compensación que satisfaga a la víctima (se hace coincidir los intereses de la víctima con los del autor). (Roxin, C.)<sup>80</sup>
5. Reconocer su responsabilidad en el delito y entender los efectos de éste en la víctima.
6. Expresar emociones (aún remordimiento) por la ofensa.
7. Recibir apoyo para reparar el daño causado a la víctima o a la familia enmendando o realizando la restitución / reparación.
8. Disculparse con las víctimas.

---

Restaurativa: Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) El infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento; c) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima; y d) no esté prohibida por la Ley para el delito cometido y por último en el art. 29 sobre las funciones de la oficina de asistencia a la víctima, habla de la cooperación que debe existir entre estos servicios y los de justicia restaurativa y establece que “Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán, en los términos que reglamentariamente se determine, apoyo a los servicios de justicia restaurativa y demás procedimientos de solución extraprocésal que legalmente se establezcan”

<sup>78</sup> MAGRO SERVET, V.: “Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance). Wolters Kluwer. Pág. 242

<sup>79</sup> GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters. 2016. Pág. 243

<sup>80</sup> ROXIN, C. (1991) “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones”. Jornadas sobre la reforma del derecho penal en Alemania. Ed, cuadernos del Consejo General del Poder Judicial. Madrid.

9. Restaurar su relación con la víctima (cuando sea adecuado), lograr un cierre.<sup>81</sup>

### **XI.III. Ventajas de la mediación para el Estado:**

1. Se ahorra los importantes costes asociados a una investigación penal que dura varios años, ya que suelen ser causas complejas y que en la fase de instrucción, pueden eternizarse. (Gimeno Beviá, J.)<sup>82</sup>
2. Ahorro de esfuerzos y costes en la ejecución de la sentencia. (Roxin, C.)
3. Alcanzar el efecto pacificador buscado por el Derecho Penal.

## **XII. CONCLUSIONES**

Como se ha podido comprobar a lo largo de mi trabajo y conforme a los objetivos inicialmente planteados en relación con la figura de la mediación y su implantación en nuestro sistema jurídico, creo conveniente establecer una serie de puntos a tratar los cuales, una vez contestados, servirán para establecer las claves que afianzan las siguientes conclusiones:

### **1. La determinación del concepto de Persona Jurídica como sujeto pasivo de Responsabilidad Penal.**

#### *Concepto de Persona Jurídica:*

- ❖ La Persona Jurídica es un instrumento que el Derecho pone al servicio de las personas físicas para que puedan actuar en el tráfico jurídico y alcanzar fines tanto de interés público como privado.
- ❖ El concepto de Persona Jurídica no aparece definido en la reforma dada al CP y esto conlleva a una casuística prácticamente inabarcable, debiendo remitirnos a lo previsto en el Código Civil, en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades de Capital. Es importante señalar que respecto de las sociedades en formación y las irregulares, se considera que tienen personalidad jurídica pudiendo ser potencialmente responsables penales.

#### *Personas Jurídicas sujetas a Responsabilidad Penal:*

- ❖ Son potencialmente responsables de ilícitos penales las sociedades particulares y mercantiles, las sociedades civiles y de interés público y algunas personas jurídicas públicas. Respecto de las personas jurídicas públicas conviene matizar:

---

<sup>81</sup> UNITED NATIONS (2006) Manual sobre programas de JR. Serie de manuales sobre justicia penal. Pág.17

<sup>82</sup> GIMENO BEVIÁ, J. (2014) "El proceso penal de las Personas Jurídicas". Tesis Doctoral para la obtención del título de Doctor Internacional. (2014) Universidad de Castilla La MANCHA. Expone como el caso AVON costó más de cien millones de dólares. Pág. 241. En este mismo sentido se pronuncia MAGRO SERVET, V.: "Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)". Wolters Kluwer. Pág. 243

- ❖ La responsabilidad penal de los partidos políticos así como de los sindicatos, se introdujo con la LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Esta responsabilidad penal se extiende a las fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica que se encuentren vinculadas a los mismos.
- ❖ El art. 31 quinquies 1 introducido por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, identifica expresamente a las Personas Jurídicas Públicas que están exentas de Responsabilidad Penal y aunque no se menciona de forma expresa, las fundaciones integradas en el sector público y sometidas al Derecho Administrativo, también deben considerarse exentas. Al respecto también cabe señalar que esta exención puede no ser aplicable cuando el Juez o Tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

## **2. *Precisar los supuestos que pueden generar Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas.***

- ❖ Estos delitos están recogidos en diferentes artículos de nuestro Código Penal y que podemos cifrar en veinticuatro atendiendo a la clasificación que se propone en la Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal efectuada por LO 5/2010.
- ❖ Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención, es que los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores no permitan derivar responsabilidad penal a la persona jurídica, como es la situación de acoso laboral. A este respecto, no puedo más que unirme a la propuesta de Velasco Núñez y Saura Alberdi para que sean contemplados en un futuro inmediato.

## **3. *Delimitar los criterios de imputación y exención de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas.***

- ❖ *Criterios de imputación de Responsabilidad Penal:* Podemos determinar que la atribución de Responsabilidad Penal a una Persona Jurídica exige la concurrencia de: 1) Que se de un hecho de referencia o conexión, es decir, que el delito haya sido cometido por parte de una Persona Física que esté al servicio de la Persona Jurídica, autorizada para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostente facultades de organización y control y que haya actuado en provecho o para beneficiar a ésta. 2) Que las actividades delictivas hayan podido cometerse por haberse incumplido gravemente los deberes de control, supervisión y vigilancia de la actividad, así, los delitos menos graves no conllevan responsabilidad penal, sólo cabe la sanción administrativa.

- ❖ ***Criterios de exención de Responsabilidad Penal:*** En función de quien cometa el delito, cabe diferenciar distintos supuestos de exención:

1) Si el delito es cometido por los representantes legales o por quienes actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la PJ, estuviesen autorizados para tomar decisiones en nombre de la PJ u ostentes facultades de organización y control, la PJ quedaría exenta de RP cuando a) Se hubiesen adoptado y ejecutado con eficacia medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión b) Cuando la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención haya sido confiado a un órgano de la PJ con poderes autónomos de iniciativa o control o tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles internos c) Cuando los autores de la comisión del delito lo hayan hecho eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención d) Cuando no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control.

2) Si el delito fuera cometido por personas que estando sometidas a la autoridad de los representantes legales, la PJ quedará exenta de RP si antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir los delitos cometidos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

#### **4. Concretar las circunstancias que atenúan la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.**

- ❖ En este aspecto proponía profundizar en la atenuante que consiste en proceder en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
- ❖ Acogiéndome a las tendencias de lo que se entiende por reparación en el Derecho Comparado, no bastaría fundamentar la atenuante de reparación en realizar un pago que satisfaga a la víctima por dos motivos principales. 1) El fin de la exigencia de responsabilidad en Derecho Penal, es tratar de mermar el daño social identificando éste con la desestabilización del orden social y reafirmar la vigencia del orden jurídico 2) Realizar un pago que satisfaga a la víctima como señal de esa reparación del daño, es una finalidad del Derecho Civil que no colmaría la finalidad del Derecho Penal.
- ❖ En Derecho Comparado, para valorar la atenuante de reparación, ésta debía ir más allá del resarcimiento económico a la víctima. Tiene que revestir un carácter simbólico donde el infractor debe reconocer la necesidad de respeto al Derecho y muestre una disponibilidad activa para disminuir el daño causado que pueda resultar equivalente e incluso mayor que el resarcimiento económico. Es el propio autor quien además de asumir la responsabilidad, debe colaborar activamente para restablecer la paz perturbada.
- ❖ Dado que nuestro sistema ha equiparado la atenuante de reparación al resarcimiento económico de la víctima, pretendo poner de manifiesto la posibilidad de apreciar la atenuante de reparación como muy cualificada. En este sentido, Goena Vives apoyada en la STS 50/2008, de 29 de enero, señala que es procedente apreciar la reparación como muy cualificada cuando el funcionamiento de la atenuación se da con mayor intensidad, es decir, va más allá del simple resarcimiento económico.



## **5. Valorar la idoneidad de la Mediación Penal en la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.**

Cuando hablamos de reparación del daño, tenemos que adentrarnos en el apasionante mundo de la Justicia Restaurativa siendo la Mediación una de sus principales herramientas. Introducir la Mediación Penal en los procesos de RPPJ abre la posibilidad de:

### ➤ *Para la Personas Jurídicas*

1. Apreciarse la atenuante de reparación como muy cualificada, lo que justificaría la rebaja de la pena hasta en dos grados a la señalada en la ley. La mediación penal posibilitaría prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos y valoraría no sólo las consecuencias económicas, también las sociales para la comunidad en su conjunto, abarcando especialmente los efectos para los trabajadores.
2. Evita importantes costes reputacionales. Uno de los principios de la Mediación es la confidencialidad y por otro lado, siempre será más beneficioso efectuar la reparación del daño con anterioridad al juicio oral que tras un largo proceso penal. A estos efectos, es muy conveniente introducir la Mediación en los Planes de Prevención de Riesgos Penales de las Personas Jurídicas, ya que, una vez detectada la conducta delictiva en aplicación de estos planes,
3. Si se persigue apreciar una posible atenuante, es más seguro para la PJ apostar por el procedimiento de la Mediación Penal (atenuante de reparación) que por la atenuante de colaboración en la investigación del hecho, ya que no se garantiza, que la fiscalía o juez/a guiados por el principio de legalidad, utilicen la información obtenida en la investigación para continuar con el proceso penal contra la PJ. En este sentido, la PJ puede tener mayor control acerca del proceso de Mediación Penal.
4. Por último, y aunque no se ha profundizado en la materia por excederse de los objetivos señalados, cabe señalar que entre las causas de exención de RPPJ, se encuentra la condición de haber adoptado y ejecutado con eficacia, de forma previa a la comisión del delito), modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Art. 31 bis 2 CP. *"Causas de exención de responsabilidad de la persona jurídica: 1.- Si el delito se comete por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, el art. 31 bis 2 CP prevé para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal:" 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia , antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión" Como condición tercera:"3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención." 2.- Si el delito se comete por quienes estén sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el punto 1, la persona jurídica quedará exenta de*



En el art.31 bis 5 CP se relacionan las condiciones legales mínimas que deben cumplir estos modelos de organización y gestión y la Circular 1/2016 de la FGE, completa esta información añadiendo *“La persona jurídica deberá establecer, aplicar y mantener procedimientos eficaces de gestión del riesgo que permitan identificar, gestionar, controlar y comunicar los riesgos reales y potenciales derivados de sus actividades de acuerdo con el nivel de riesgo global aprobado por la alta dirección de las entidades, y con los niveles de riesgo específico establecidos”*.

La posibilidad de comunicar los riesgos, tanto potenciales como reales en un proceso de mediación (confidencial), supone en sí mismo, una garantía de salvaguarda de la imagen reputacional de la PJ, que repercutirá directamente en su gestión y control.

➤ *Para el Estado*

1. La máxima es el ahorro de costes, por un lado asociados a la investigación penal y por otro a la ejecución de la sentencia.
2. También me parece oportuno señalar que se completarían los fines del Derecho Penal, dando protagonismo a las víctimas y poniendo el foco en la lesividad social y no el individual.

➤ *Para la/s Víctima/s:*

1. Pueden participar directamente en la solución de la situación y de las consecuencias del delito. Tienen la oportunidad de ser resarcidas económicamente más rápido por el daño sufrido y también, poner de manifiesto aquéllos otros aspectos intangibles que son importantes para ellas y que contribuyen a restaurar el daño provocado por la comisión del acto delictivo.
2. La mediación Penal les facilita un espacio donde pueden recibir respuestas a sus preguntas sobre el delito, su proceso y/o el delincuente, expresar el impacto que ha tenido sobre ellas, recibir disculpas. Además, la Mediación Penal no solo se circunscribe a la víctima directa, también pueden participar víctimas indirectas (familiares o asimilados) e inclusive el conjunto de la población que ha resultado dañada, si bien, en este sentido, abogaría por la implementación de herramientas adicionales de Justicia Restaurativa y no sólo de la Mediación Penal.

---

*responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.*

### XIII. BIBLIOGRAFÍA

- ALCÁCER GUIRAO, R. (2011) *“Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso”*. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid.
- BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) *“Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters.
- CÁMARA ARROYO, S. (2011) *Revista de Justicia Restaurativa* nº 1 pág. 9
- CASTILLEJO MANZANARES, R. (2015) *“La actual regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”*. La Ley Mercantil Núm. 18, Sección Empresa y Empresario. Editorial La Ley.
- CÓDIGO PENAL ALEMÁN. Traducción de López Díaz, C. Referenciado también en webgrafía.
- DE VICENTE REMESAL, J. (2014) *“Control de riesgos en la empresa y responsabilidad penal”* Revista Penal nº 34. ISSN 1138-9168 pág. 170 ss.
- DÍAZ LÓPEZ, J. A. (2011) *“Propuestas para la práctica de la mediación penal. Delitos patrimoniales cometidos entre parientes y responsabilidad penal de las personas jurídicas”*. Revista para el Análisis del Derecho. ISSN-e 1698-739X, Nº. 3. Referenciado también en webgrafía.
- DOMINGO DE LA FUENTE, V. (2008) *“Justicia Restaurativa y mediación penal”*. Revista de derecho penal, (Lex Nova) ISSN 1576-9763, nº 23.
- DOMINGO DE LA FUENTE, V. (2015) *“Análisis de la Mediación y la Justicia Restaurativa como derecho de las Víctimas”*.
- ETXEBARRIA ZARRABEITIA, J. (2011) *“Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso”*. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid
- FEIJOO SÁNCHEZ, B.J. (2016). *Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters.
- GIMENO BEVIÁ, J. (2014) *“El proceso penal de las Personas Jurídicas”*. Tesis Doctoral para la obtención del título de Doctor Internacional. Universidad de Castilla La Mancha.
- GOENA VIVES, B. (2017): *“Responsabilidad Penal y Atenuantes en la persona jurídica”*. Marcial Pons. Colección Derecho Penal y Criminología. Madrid.
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016) *“Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”*. Segunda Edición adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Civitas - Thomson Reuters.
- HERNÁNDEZ MOURA, B. (2014). *“Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y ADR”* Área de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid.
- MAGRO SERVET, V. (2017): *“Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance)”*. Wolters Kluwer.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L. (2016): *“Comentarios al Código Penal” (Tras las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de marzo, y 2/2015, de 30 de marzo)*. Dykinson 2ª Edición.

- MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. y SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. P. (2011): “*Justicia Restaurativa, Mediación Penal y Penitenciaria: Un renovado impulso*”. Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Colección de Mediación y Resolución de Conflictos. Madrid
- MORAL, M.T y GONZÁLEZ, B. “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. Fundesem Business School, febrero 2015. Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
- OLALDE ATAREJOS, J.A. (2017) “*40 Ideas para la práctica de la Justicia Restaurativa en la Jurisdicción Penal*”. Dykinson
- PASCUAL RODRÍGUEZ, E. (2012) “*La Mediación en el Sistema Penal*”. Memoria dirigida por Martínez Escamilla, Margarita para optar al grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Madrid
- RODRÍGUEZ RAMOS, L. (2016) “Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas” (Al hilo de las SSTs 514/2015, 154 y 221/2016)”, Diario La Ley, nº 8766, Sección Doctrina, Ref. D-210, Editorial La Ley.
- ROXIN, C. (1991) “La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones”. Jornadas sobre la reforma del derecho penal en Alemania. Ed, cuadernos del Consejo General del Poder Judicial. Madrid.
- SÁNCHEZ MARTÍN, M. Á. (2017) “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Plan de Prevención de Riesgos Penales y Código de Conducta”. Thomson Reuters Aranzadi. Primera Edición.
- SERRANO ZARAGOZA, Ó.: “Reestructuración empresarial y responsabilidad penal de la persona jurídica Fiscal de Delitos Económicos” Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 24. Sección Ponencias y Estudios.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2016): Fundamentos del Derecho Penal en la Empresa. Editorial Marcial Pons. pág. 153 ss,
- UNITED NATIONS (2006) Manual sobre programas de JR. Serie de manuales sobre justicia penal.
- VELASCO NUÑEZ, E y SAURA ALBERDI, B. : “Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Thomson Reuters Aranzadi. 2016.

## Webgrafía

- BLOG DE DOMINGO DE LA FUENTE, V.  
  
<http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es>
- CÓDIGO PENAL ALEMÁN. Traducción de López Díaz, C.  
  
[https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj\\_20080609\\_13.pdf](https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj_20080609_13.pdf)
- DÍAZ LÓPEZ, J. A. (2011) “Propuestas para la práctica de la mediación penal. Delitos patrimoniales cometidos entre parientes y responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Revista para el Análisis del Derecho.  
  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3903629>

#### **XIV. FUENTES JURÍDICAS UTILIZADAS**

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
- Ley Orgánica 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO número 5/2010.
- Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del CP efectuada por LO 1/2015.
- Sentencia TS nº 919/2002 Sala 1ª, de lo Civil. Ponente: D. Pedro González Poveda.
- Sentencia TS nº 50/2008 de la Sala 2ª de lo Penal. Ponente: D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
- Sentencia TS nº 514/2015, de la Sala de lo Penal, sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en delito de estafa. Ponente: D. Manuel Marchena Gómez.